

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, Diecinueve (19) de Agosto de Dos Mil Veintidós (2022)

Auto Interlocutorio

MAGISTRADA PONENTE: LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

ACCIÓN:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76001-23-33-004-2018-00659-00
DEMANDANTE:	STELLA RODRÍGUEZ DE QUINTERO MARÍA ISABEL QUINTERIO RODRÍGUEZ JUAN FERNANDO CHAVEZ ALBERTO GALVIS NAVIA <a href="mailto:juanfernandogomezchavez@yahoo.es">juanfernandogomezchavez@yahoo.es</a> <a href="mailto:albertogalvisgaviria@gmail.com">albertogalvisgaviria@gmail.com</a>
DEMANDADO:	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN <a href="mailto:jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co">jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co</a>
ASUNTO	DECRETA MEDIDA CAUTELAR

I. OBJETO DE LA DECISION

La parte ejecutante solicitó que se requiriera a los Bancos de Occidente, BBVA en especial sobre las cuentas No. 000100140761 y 000100001609, Banco Davivienda y Banco Agrario, indicando que dichas entidades, deben acatar la orden judicial de embargo y retención de dineros sobre las cuentas cuyo titular sea la entidad demandada decretada dentro del presente tramite.

De igual forma solicitó que se amplíe la medida cautelar en el sentido de que se embarguen los remanentes que existan o que resultaren en los siguientes procesos ejecutivos:

DEMANDANTE	DESPACHO JUDICIAL
AUGUSTO RAMIREZ ZULUAGA	Tribunal Administrativo del Cauca. 19001-23-33-003-2017-00384-00.
HAROL HERNAN URMENDEZ SALINA Y OTROS	Juzgado Octavo Administrativo de Popayán. 19001-33-33-008-2019-00045-00

II.-CONSIDERACIONES:

El artículo 466 del Código General del Proceso, en lo que refiere a medidas cautelares en procesos ejecutivos, consagra que:

*“ARTÍCULO 466. PERSECUCIÓN DE BIENES EMBARGADOS EN OTRO PROCESO. Quien pretenda perseguir ejecutivamente bienes embargados en otro proceso y no quiera o no pueda promover la acumulación, podrá pedir el embargo de los que por cualquier causa se llegaren a desembargar y el del remanente del producto de los embargados.*

*(...)*

*La orden de embargo se comunicará por oficio al juez que conoce del primer proceso, cuyo secretario dejará testimonio del día y la hora en que la reciba,*

*momento desde el cual se considerará consumado el embargo a menos que exista otro anterior, y así lo hará saber al juez que libró el oficio. (...)."*

Respecto de la nueva solicitud de embargo de remanente de productos embargados, encuentra el Despacho que es procedente decretarlo en virtud de los términos del artículo 466 del CGP.

Teniendo en cuenta lo anterior, de conformidad con el numeral 10 del artículo 593 del CGP, se calcula el monto máximo de la medida a decretar, teniendo en cuenta el valor del crédito determinado en las órdenes de pago<sup>1</sup>, costas procesales<sup>2</sup>, más un 50%, limitando el monto de la misma a la suma de **CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE (\$171.465.903)**.

La Secretaría de la Corporación deberá librar los oficios respectivos al Tribunal Administrativo del Cauca y al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán, enviándoles copia de la presente providencia para lo de su cargo.

Respecto de la solicitud efectuada por la parte ejecutante consistente en requerir a los Bancos Occidente, BBVA, Davivienda y Agrario para que practiquen la orden de embargo aquí decretada, debe señalarse lo siguiente:

Mediante Auto de fecha 30 de julio de 2020, el Despacho procedió a decretar el embargo y retención de los dineros depositados en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, certificado de depósito a término y certificado de depósito de ahorro fijo que se encontraren a nombre de la Fiscalía General de la Nación, entre otras entidades financieras, en los Bancos Occidente, Davivienda, Agrario y BBVA.

El decreto de dicha medida cautelar se fundamentó en una de las excepciones de inembargabilidad presupuestal de acuerdo con el precedente constitucional, el cual, si bien reconoce la regla general de inembargabilidad de los recursos públicos, acepta unas excepciones, entre otras, para la ejecución de obligaciones contenidas en sentencias judiciales, tal como ocurre en este caso.

Una vez enviados por la Secretaría de la Corporación los respectivos oficios a las diferentes entidades financieras, el BBVA informó lo siguiente:

*"En atención al oficio de la referencia mediante el cual se decretó el embargo y retención de los dineros depositados en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, certificados de depósito de ahorro a término fijo que se encuentren a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION identificado con NIT. 800152783-2, nos permitimos informar que el Banco BBVA procedió con la afectación de la cuenta corriente No. 0100000478, de titularidad de la entidad demandada por un valor de \$166.461.459,00.*

*No obstante, es preciso mencionar que desde la fecha en que se recibió el Oficio de embargo, hasta la fecha del presente memorial, BBVA COLOMBIA no hemos realizado Depósitos Judiciales a órdenes de su Despacho, en consideración a que los saldos en la cuenta corriente del cliente no ha habido recursos disponibles, la cual se encuentra inactiva hace más de un (1) año, cuyo saldo de*

<sup>1</sup> Autos del 09 de abril y 09 de julio de 2019.

<sup>2</sup> Fijadas en el Auto del 11 de marzo de 2022

*(§ 0.06) fue traslado a la Dirección del Tesoro Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo el artículo 36 del Decreto 2331 de 1998. Por otro lado y en consideración a lo advertido en su oficio y a lo consagrado en el Código General del Proceso y la Circular Básica Jurídica, nos hemos abstenido de aplicar la medida cautelar sobre los productos respecto a los cuales el cliente ha manifestado manejan recursos de naturaleza inembargable”.*

El Banco Occidente informó los siguiente:

*“Informamos que nuestro cliente nos ha manifestado que sus cuentas administran recursos inembargables, adicionalmente las cuentas del Demandado se encuentran embargadas a la fecha por oficio por:*

*-JUZGADO 8 ADMINISTRATIVO DE NEIVA. Se radicó el Oficio No. 1626 en el día 18 de OCTUBRE del año 2017, cuyo demandante(s) corresponde(n) a GERARDO FIERRO FIERRO.*

*- TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA. Se radicó el Oficio No. 447 en el día 10 de junio del año 2019, cuyo demandante(s) corresponde(n) a AUGUSTO RAMÍREZ ZULUAGA.*

*En los términos del artículo 466 del Código General del Proceso le corresponde al demandante solicitar el embargo de remanentes dentro del(os) proceso(s) cuya(s) medida(s) cautelare(s) se relaciona(n) en esta comunicación.”*

Por su parte, los Bancos Davivienda y Agrario no se pronunciaron respecto de la medida decretada.

Por lo expuesto aunque el Despacho no hará un nuevo pronunciamiento respecto del decreto del embargo y retención de los dineros que posea la Fiscalía General de la Nación en dichas entidades financieras, se ordenará que por la Secretaría de la Corporación se oficie a los Bancos Davivienda, Agrario y BBVA reiterando el cumplimiento de la medida cautelar ordenada mediante auto de fecha 30 de julio de 2020, en el que no obstante el carácter de inembargable de los recurso públicos, se invocó el fundamento legal y jurisprudencial para la procedencia de la medida, por corresponder al cumplimiento de una sentencia judicial; advirtiéndoles que deberán constituir el respectivo certificado de depósito a órdenes de este Tribunal, so pena de dar aplicación a la sanción contemplada en el parágrafo 2 del artículo 593 del Código General del Proceso.

Frente al requerimiento u oficio que se haga el banco BBVA, la Secretaría debe referenciar igualmente las cuentas Nos. 000100140761 y 000100001609 cuyo titular es la Fiscalía General de la Nacional, según lo indica la parte demandante, para que sean objeto de la práctica o materialización de la medida decretada.

Con respecto al Banco Occidente no se ordenará requerirlo, pues informa que las cuentas que posee la entidad ejecutada en dicha entidad financiera ya se encuentran embargadas.

**- Saneamiento del proceso en el tramite ejecutivo.**

El artículo 42 del Código General del proceso señala que son deberes del juez entre otras, realizar el control de legalidad de la actuación procesal una vez agotada cada etapa del proceso.

Por su parte, el artículo 207 del CPACA dispone que, agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarreen nulidades, los

cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes.

Así mismo, la Sección Segunda del Consejo de Estado, entre otros pronunciamientos, en providencia de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 23001-23- 33-000-2013-00136-01(1509-16), con ponencia del Consejero RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS ha analizado el artículo 446 del CGP -Liquidación del crédito y las costas- en consonancia con el artículo 430 ibidem-mandamiento de pago- y la facultad de saneamiento prevista en el artículo 42 del mismo Estatuto, concluyendo que el mandamiento de pago no se convierte en una situación inamovible para el juez, pues con posterioridad a la expedición de esta providencia es posible variar el monto de las sumas adeudadas con el fin de adoptar una decisión que se ajuste a la realidad procesal de cara al título ejecutivo, así como a los demás elementos de juicio que obren en el expediente.

Explica que si con posterioridad a librar el mandamiento de pago, el juez se percató que aquél se profirió por mayor valor al que correspondía de conformidad con la sentencia judicial cuyo cobro se pretendía, está facultado para subsanar la inconsistencia advertida, pues los artículos 42 del Código General del Proceso y 207 del CPACA le imponen el deber de realizar el control de legalidad de la actuación procesal, una vez agotada cada etapa del proceso.

Que, en consonancia con lo anterior, los autos ilegales, como lo es aquel que libra el mandamiento por una suma superior a la que correspondía, no atan al juez ni a las partes pues carecen de ejecutoria, por lo cual la autoridad judicial puede hacer un control de legalidad posterior y subsanar las imprecisiones que evidencie.

Aduce además que, el papel del juez ordinario en el Estado Social de Derecho es el del funcionario activo, vigilante y garante de los derechos materiales que consulta la realidad subyacente de cada caso para lograr la aplicación del derecho sustancial, la búsqueda de la verdad y, por ende, la justicia material, por lo que al advertir un error debe proceder a subsanarlo para no seguir incurriendo en el mismo, más aún, **“cuando pueden estar comprometidos recursos públicos”**.

En este caso, aunque tanto en el título base de ejecución como en el mandamiento de pago y la orden de seguir adelante la ejecución se ordenó el reconocimiento y liquidación de los intereses moratorios respectivos, en los términos del artículo 177 del CCA; sin embargo, resulta necesario subsanar dicha imprecisión, por cuanto si bien, la providencia que contiene la obligación, fue proferida bajo el imperio del Decreto 01 de 1984-CCA, quedó ejecutoriada el día 23 de junio de 2016, es decir, cuando ya estaba vigente la Ley 1437 de 2011.

**- Tránsito legislativo para efectos de liquidar intereses moratorios en procesos ejecutivos.**

Si bien tanto en el artículo 177 del CCA como en el 192 del CPACA se dispone que ejecutoriada la respectiva providencia, los beneficiarios deberán presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad responsable para hacerla efectiva, sin embargo, para efectos de que no cesen los intereses moratorios, en la primera disposición se prevé que aquellos, deben acudir ante la entidad a solicitar su cumplimiento con la documentación exigida, dentro de los 6 meses contados desde la ejecutoria de la providencia, so pena

que cesen tales intereses, desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma. Por el contrario, en la segunda disposición, cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.

De otro lado, la tasa aplicable para el pago de intereses moratorios es diferente, pues según lo previsto en el artículo 177 del C.C.A, ellos corresponden a una y media veces de los corrientes bancarios, por el contrario, de acuerdo con lo establecido por el artículo 195 del CPACA, los intereses moratorios deben liquidarse a una tasa equivalente al DTF<sup>3</sup> a partir de la ejecutoria de la providencia y hasta los 10 primeros meses y a la tasa de mora comercial una vez vencido este término.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado<sup>4</sup> explicó que la Ley 1437 de 2011, en los artículos 308 y 309, consagró el régimen de transición y vigencia, así como, las normas que derogó, respectivamente. La vigencia del nuevo Código se dispuso a partir del 2 de julio de 2012 y se ordenó aplicarla a todos los procesos, demandas, trámites, procedimientos o actuaciones que se inicien con posterioridad a dicha fecha, pero también expresamente se señaló que los que estuvieran en curso al momento de entrar aquella a regir, seguirían siendo gobernados por el régimen jurídico precedente.

Que, por lo tanto, a los trámites, procesos, actuaciones, procedimientos, demandas y actuaciones iniciadas antes del 2 de julio de 2012 se les aplica, en estricto rigor, el Decreto Ley 01 de 1984, desde su inicio y hasta su culminación, independientemente de la fecha en que ocurra esta última.

Señaló que el trámite de pago de condenas judiciales o conciliaciones previsto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, no constituye un procedimiento o actuación administrativa independiente o autónoma respecto al proceso o actuación judicial que dio lugar a su adopción, pues se concreta en simples actos de cumplimiento o de ejecución de las sentencias condenatorias o las conciliaciones, de manera que no representan la culminación de una actuación administrativa, ni pueden por lo mismo tener un tratamiento separado de la causa que las origina.

Sin embargo, en el mismo concepto del Consejo de Estado, resolvió el siguiente interrogante, respecto de los eventos en los cuales una entidad deba dar cumplimiento a una sentencia o conciliación con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (julio 2 de 2012), pero cuya demanda fue interpuesta con anterioridad a esta fecha: *“¿se debe liquidar el pago con intereses moratorios de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1437 de 2011 o con las disposiciones para la liquidación de intereses moratorios del Decreto 01 de 1984?”*

Con respecto a lo anterior, el Alto Tribunal indicó que la tasa de mora aplicable para créditos judicialmente reconocidos en sentencias condenatorias y conciliaciones debidamente aprobadas por la jurisdicción es la vigente al momento en que se incurre

<sup>3</sup> <http://www.banrep.gov.co/estad/economia/consulta-tasa-interes4.htm>. DTF “Es el promedio ponderado de las tasas de interés efectivas de captación a 90 días (las tasas de los Certificados de Depósito a Término a 90 días) de los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y corporaciones de ahorro y vivienda”

<sup>4</sup> En Concepto de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014)- Rad. No. 11001-03-06-000-2013-00517-00, Número interno: 2184, Consejero ponente: ÁLVARO NAMÉN VARGAS.



en mora en el pago de las obligaciones dinerarias derivadas de aquellas. Que, en consecuencia, cuando una entidad estatal deba dar cumplimiento a una sentencia o conciliación con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (julio 2 de 2012), pero cuya demanda fue interpuesta con anterioridad a esta, debe liquidar el pago con intereses moratorios de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1437 de 2011.

Sin embargo, también expuso que, si el incumplimiento de la referida obligación se inicia antes del tránsito de legislación y se prolonga durante la vigencia de la nueva ley, la pena, esto es, el pago de intereses moratorios, deberá imponerse y liquidarse por separado lo correspondiente a una y otra ley.

Dicho concepto fue acogido por la Sección Segunda<sup>5</sup> del Consejo de Estado, señalando que cuando las sentencias se expidieron en vigencia del Decreto 01 de 1984, pero su incumplimiento se proyectó en el tiempo abarcando la entrada en vigencia del CPACA, la normativa para liquidar los intereses moratorios se aplica de manera independiente, es decir, por los períodos que coinciden con las respectivas vigencias de los artículos 177 del Decreto 01 de 1984 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

Concluye entonces dicha Sección que los intereses de mora que se generen con ocasión de una sentencia proferida en esta jurisdicción, habrán de liquidarse conforme a la norma que rige al momento de su causación, por lo que respecto de las providencias que quedaron ejecutoriadas antes de la entrada en vigencia del CPACA, la respectiva mora se tasaré, en una parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, y, la otra parte, conforme a la Ley 1437 de 2011, si la causación de los intereses se prolonga en el tiempo.

Para el efecto explicó que los intereses de mora habrán de liquidarse conforme a la norma que rige al momento de su causación, de modo que si la conducta tardía de la entidad obligada al cumplimiento del fallo se prolonga en el tiempo y se da durante ese lapso un cambio de legislación, es menester aplicar la norma vigente que abarque el respectivo período o días de mora de que se trate, por configurarse la mora día a día, causando interés por cada instante de retardo, bajo la ley que se encuentre vigente, **siendo imperiosa la tasa fijada en la disposición posterior.**

Por todo lo expuesto, se entendió que, si la demanda que originó el título base de ejecución fue presentada antes de que entrara a regir la Ley 1437 de 2011, es decir, con vigencia del CCA, pero el pronunciamiento que puso fin a la controversia se emitió cuando la nueva legislación ya estaba en vigor, la tasa de los intereses moratorios a aplicar es aquella prevista en el artículo **195 del CPACA.**

Así mismo que en los casos en que la providencia que contiene la obligación objeto de la ejecución, pese a ser aprobada y ejecutoriada en vigencia del Régimen anterior- CCA; la causación de los intereses moratorios se prolongó durante la vigencia del nuevo Estuvo Procesal- CPACA-, deben liquidarse los intereses de mora bajo las reglas del artículo 177 CCA, hasta el 02 de julio de 2012, -fecha en que empezó a regir en nuevo Código-, y en adelante deben liquidarse bajo la tasa del **artículo 195 del CPACA.**

---

<sup>5</sup> En sentencia de tutela de fecha 01 de diciembre de 2017, Consejera Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, Rad. No. 11001-03-15-000-2017-02763-00 y en providencias de fechas veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), Consejero Ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, Radicación: 23001 23 33 000 2013 00136 01, Número interno: 1509-2016 y dos (2) de abril de dos mil veinte (2020), Consejero Ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, Referencia: Ejecutivo, Radicación: 76001-23-33-000-2015 01486-01 (0116-2018).

Luego el Consejo de Estado en un pronunciamiento más reciente<sup>6</sup> ha explicado que los intereses de mora que deben liquidarse al capital adeudado corresponden a los determinados en la norma que se encuentra vigente al instante en que se incurrió en la tardanza del pago de las obligaciones dinerarias, por lo que si la mora se causó en vigencia del CPACA se debe dar aplicación a **los artículos 192 y 195 de dicho Estatuto.**

Se concluye entonces que si la providencia que emerge como título de recaudo ejecutivo, pese a originarse de una demanda interpuesta en vigencia del CCA, quedó ejecutoriada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, los intereses moratorios deben liquidarse, conforme a los artículos 192 y 195 del CPACA, aplicables para establecer los periodos de causación y cesación y la tasa.

Como quiera que en el presente caso la providencia base de recaudo quedo ejecutoriada en vigencia del CPACA, debe tenerse en consideración para la liquidación de los intereses de mora una fórmula variable, esto es, a una tasa DTF por los primeros 10 meses y, finalizado dicho término, a una tasa comercial.

Además, para establecer el periodo de causación y cesación de los mismos debe aplicarse la regla del artículo 192 del CPACA consistente en que cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.

#### **- Caso concreto**

En el caso en estudio se libró mandamiento de pago en contra de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION y en favor de los señores STELLA RODRIGUEZ DE QUINTERO por la suma de \$32.482.236,50, MARIA ISABEL QUINTERO, por la suma de \$13.534.265, JUAN FERNANDO CHAVEZ y ALBERTO GALVIS NAVIA, por las sumas de \$32.482.236,2 para cada uno. Igualmente se libró orden de pago por los correspondientes intereses moratorios del artículo 177 CCA, causados desde el 16 de agosto de 2017, hasta que se verificara el pago efectivo y total de la obligación.

Mediante Auto de fecha 2 de septiembre de 2021, el Despacho dispuso seguir adelante con la ejecución, toda vez que según la constancia secretarial del 09 de agosto de 2021 la parte ejecutada – Fiscalía General de la Nación- no se pronunció respecto de las órdenes de pago, de tal surte que al no formular excepciones debía seguirse adelante con la ejecución en los términos del inciso 2º del artículo 440 del Código General del Proceso, ordenándose la práctica de la liquidación del crédito de conformidad con las reglas previstas en el artículo 446 ibidem y bajo los parámetros expuestos en los respectivos mandamientos de pago y condenado al pago de costas procesales a la entidad, para lo cual se fijó por concepto de agencias en derecho, el 5% de las sumas determinadas en los mandamiento de pago, equivalente a un total de \$5.549.08,7.

En virtud de lo anterior, el día 09 de septiembre de 2021 la parte actora presentó liquidación del crédito por valor total de \$238.042.567 por concepto de capital más intereses moratorios causados desde septiembre de 2017 a la fecha de la liquidación.

---

<sup>6</sup> Providencias del siete (07) de julio de dos mil veintidós (2022), Radicación: 25000-23-42-000-2016-04077-01, CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, Referencia: EJECUTIVO.



Inconforme con la decisión de seguir adelante la ejecución, la Fiscalía General de la Nación, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, argumentando que oportunamente presentó la contestación de la demanda y a su vez formuló solicitud de regulación o pérdida de intereses en virtud del artículo 425 del CGP.

Mediante constancia secretarial de fecha 12 de enero de la presente anualidad, el Secretario de la Corporación verificó que, dentro del término legal, la Fiscalía General de la Nación, efectivamente había allegado contestación de la demanda ejecutiva, mediante la cual propuso excepciones y que además formuló solicitud de regulación o pérdida de intereses.

En virtud de lo anterior, mediante auto del 14 de enero de 2022, el Despacho decidió no reponer el auto que ordenó seguir adelante la ejecución como quiera que de la contestación de la demanda se evidenció que la entidad ejecutada no formuló las excepciones de que trata el artículo 442, numeral 2° del CGP. Sin embargo, se ordenó surtir por la Secretaría de la Corporación, el traslado del incidente de *“Regulación o pérdida de intereses”*, presentado por la entidad accionada, por el término de tres (3) días, de conformidad con el artículo 110 del CGP.

Una vez surtido el traslado del incidente de regulación o pérdida de intereses formulado por la entidad demandada, -manifestando que en razón a que el beneficiario de la condena y su apoderado no presentaron la solicitud de pago de la sentencia que se pretendía ejecutar, con el lleno de los requisitos legales, cesaron los intereses moratorios de que trata el artículo 177 del CCA-, mediante Auto de fecha 11 de marzo de 2022 se rechazó por improcedente al considerarse que la regulación o pérdida de intereses es una figura procesal que solo aplica cuando, entre otros presupuestos, los intereses excedan el límite señalado en la ley, lo que en el cobro o ejecución de las sentencias que imponen condena a entidades públicas proferidas por esta jurisdicción no se da, pues en estos casos las reglas de los intereses moratorios están fijadas por el Legislador, es decir, no se trata de asuntos en los que los intereses moratorios se pacten y se acuerde una tasa de interés, sino que ya está determinada en la Ley.

Que, sin perjuicio de lo anterior, no podía desconocer el Despacho que la entidad accionada allegó pruebas que podrían alterar los términos del mandamiento de pago en cuanto a los intereses moratorios específicamente.

Para el efecto se verificó que el representante judicial del beneficiario de la sentencia objeto de ejecución, presentó solicitud de cumplimiento de la misma ante la entidad condenada, el día 16 de agosto de 2017, para lo cual, adjuntó solamente su copia auténtica, sin presentar la documentación necesaria para el pago del fallo, los que en este caso, eran los siguientes: i) el poder otorgado por el demandante dentro del proceso que originó la sentencia que se ejecuta, que establecía la facultad de su apoderado para recibir, ii) la identificación plena del beneficiario y del destinatario para efectuar la consignación o pago con la respectiva certificación bancaria. Que tales documentos fueron requeridos por la entidad, sin que fueran aportados por los interesados, según se advirtió de la certificación expedida por la Coordinadora Sección de pago de sentencias de la Fiscalía General de la Nación de fecha 15 de enero de 2021 aportada al plenario.

Que, por tanto, ante dichos hallazgos, en virtud de saneamiento del proceso los mandamientos de pago debían ser modificados en esa etapa procesal, en relación con los intereses moratorios, reconocimiento que debía ser reajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del CCA, que establecía que su causación, se generaba





a partir del día siguiente al de la ejecutoria del fallo, es decir, 24 de junio de 2016, hasta el 24 de diciembre del mismo año- 6 meses. Ello, por cuanto, no se presentó ante la entidad accionada junto con la solicitud de cumplimiento y pago de la sentencia objeto de recaudo, la documentación necesaria, lo que, generaba la cesación de los intereses moratorios, desde el 25 de diciembre de 2016.

Por lo anterior, al modificarse las órdenes de pago, se ordenó seguir adelante la ejecución para el pago de las sumas determinadas en éstas a favor de los señores STELLA RODRÍGUEZ DE QUINTERO, MARÍA ISABEL QUINTERO, JUAN FERNANDO CHAVEZ y ALBERTO GALVIS NAVIA y en contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, mediante los autos del 9 de abril y 9 de julio de 2019, pero con causación de los intereses moratorios por el periodo comprendido entre el 24 de junio al 24 de diciembre de 2016, y cesación de dichos intereses a partir del 25 de diciembre de 2016. Así mismo se condenó a la parte ejecutada, FISCALIA GENERAL DE LA NACION, al pago de costas procesales, reduciéndose el valor fijado por concepto de agencias en derecho, en un 3% de las sumas determinadas en los mandamientos de pago, equivalente a un total de \$3.329.429,22. Se ordenó la práctica de la liquidación del crédito en los anteriores términos.

En este estado del proceso, ya ordenada la práctica del crédito en virtud de las reglas del artículo 446 del CGP, sin que las partes hayan allegado aun al plenario la respectiva liquidación para ser aprobada o modificada, en los términos de la orden de seguir adelante la ejecución contenida en el auto de fecha 11 de marzo de 2022, resulta pertinente advertir de acuerdo con los fundamentos de esta providencia, que como quiera que la parte ejecutante no presentó la solicitud de cumplimiento de la providencia objeto de ejecución debidamente, dentro de los 3 meses desde su ejecutoria, de que trata el artículo 192 del CPACA, norma aplicable por haber quedado en firme la sentencia en vigencia del nuevo Estatuto, se modifican los términos nuevamente de las órdenes de pago, en el sentido que se causan intereses moratorios en este caso a partir del 24 de junio de 2016 al 24 de septiembre del mismo año, cesando a partir del 25 de septiembre de 2016 hasta la fecha en que se notificó el primer mandamiento de pago<sup>7</sup> - 24 de abril de 2019-, con causación de los intereses moratorios nuevamente a partir del 25 de abril de 2019 hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación.

Conviene precisar que los intereses moratorios causados desde el 24 de junio al 24 de septiembre de 2016— habrán de liquidarse con la tasa equivalente al DTF vigente para la fecha de causación, mientras que los intereses moratorios causados a partir del 25 de abril de 2019 habrán de liquidarse con la tasa de interés moratorio comercial (1.5. del interés bancario), de conformidad con el artículo 195 del CGP.

Por lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

---

<sup>7</sup> El Consejo de Estado en varios pronunciamientos, entre ellos, en providencias de fechas treinta (30) de octubre de dos mil veinte (2020), Radicación número: 44001-23-33-000-2016-01291-01 (64239), Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO y dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), Radicación número: 25000-23-26-000-1999-01329-02(66950), Consejero ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ, ha señalado que según los artículos 1608<sup>7</sup> del Código Civil y 94<sup>7</sup> del Código General del Proceso, la solicitud de pago de una providencia judicial, puede realizarse por vía judicial, pues la notificación del mandamiento ejecutivo produce el efecto del requerimiento para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin. Por tanto, la fecha a partir de la cual se pueden generar los intereses será la de la notificación del auto que libra el mandamiento de pago.

### RESUELVE:

**PRIMERO: DECRETAR EMBARGO Y RETENCION DE DINEROS** del remanente que exista o llegare a existir del producto de los embargados en los procesos Nrs. **19001-23-33-003-2017-00384-00 del Tribunal Administrativo del Cauca**, demandante AUGUSTO RAMIREZ ZULUAGA y **19001-33-33-008-2019-00045-00 del Juzgado Octavo Administrativo de Popayán**, demandante HAROL HERNAN URMENDEZ SALINAS Y OTROS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** Por Secretaria de la Corporación líbrese los oficios respectivos al Tribunal Administrativo del Cauca y al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán, enviándoles copia de la presente providencia para lo de su cargo, de acuerdo a los términos del artículo 466 del CGP.

**CUARTO:** La presente medida de embargo de remanentes se limita a la suma de **CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE (\$171.465.903).**

**QUINTO:** Por la Secretaría de la Corporación ofíciase a los Bancos Davivienda, Agrario y BBVA reiterándoles el cumplimiento de la medida cautelar ordenada mediante auto de fecha 30 de julio de 2020, con copia del mismo, en el que no obstante el carácter de inembargable de los recurso públicos, se invocó el fundamento legal y jurisprudencial para la procedencia de la medida, por corresponder al cumplimiento de una sentencia judicial; advirtiéndoles que deberán constituir el respectivo certificado de depósito a órdenes de este Tribunal, so pena de dar aplicación a la sanción contemplada en el parágrafo 2 del artículo 593 del Código General del Proceso. Frente al requerimiento que se haga el banco BBVA deben referenciarse igualmente las cuentas Nos. 000100140761 y 000100001609 cuyo titular es la Fiscalía General de la Nacional, para que sean objeto de la práctica o materialización de la medida decretada.

**SEXTO:** Modificar las órdenes de pago, exclusivamente en cuanto a la liquidación de intereses moratorios los cuales en este caso se causan a partir del 24 de junio de 2016 al 24 de septiembre del mismo año, con tasa equivalente al DTF vigente para la fecha de causación. Así mismo, cesan los intereses moratorios a partir del 25 de septiembre de 2016 hasta la fecha en que se notificó el primer mandamiento de pago -24 de abril de 2019-. Se causan nuevamente a partir del 25 de abril de 2019 hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación, cuya liquidación se hará conforme a la tasa de interés moratorio comercial (1.5. del interés bancario).

La liquidación del crédito en virtud de los términos del artículo 446 del CGP, ya ordena dentro del presente trámite, debe ser practicada por las partes teniendo en cuenta la orden de seguir adelante la ejecución contenida en el Auto de fecha 11 marzo de 2022 para el pago de las sumas determinadas en los mandamientos de pago librados a favor de los señores STELLA RODRÍGUEZ DE QUINTERO, MARÍA ISABEL QUINTERO, JUAN FERNANDO CHAVEZ y ALBERTO GALVIS NAVIA y en contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, mediante los autos del 9 de abril y 9 de julio de 2019 y la condena en costas procesales fijada en dicha providencia; así como el presente auto en cuanto a la liquidación de los intereses moratorios (periodos de causación y cesación y tasa).

RADICACIÓN : 76001-23-33-004-2018-00659-00  
Medio de control : EJECUTIVO  
Accionante : STELLA RODRÍGUEZ DE QUINTERO Y OTROS  
Accionado : FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN



11

**SEPTIMO:** Todos los memoriales que se presenten durante el trámite del presente proceso, deberán ser allegados a través de la **ventanilla virtual** en la plataforma Samai (<https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/>), o podrá remitirse al correo electrónico de la secretaria [rpmemorialestadmvc Cauca@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:rpmemorialestadmvc Cauca@cendoj.ramajudicial.gov.co), indicando el número de radicado del proceso, nombre del Magistrado ponente, nombre del demandante y el asunto.

### NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado Electrónicamente por Samai)  
**LUZ ELENA SIERRA VALENCIA**  
**MAGISTRADA**